

Movimiento popular y democracia en Chile

TERESA CASTRO ESCUDERO

“La Cordillera de los Andes no hace de Chile una isla y mientras un chileno amordace a otro chileno hay una violación de principios universales.”

Claude Lelouch, Ariane' Mnouchkine, cineastas.

INTRODUCCIÓN Y SÍNTESIS

Ante el replanteamiento de la opción democrática en países como Chile, este trabajo analiza el papel de los movimientos populares que buscan la más amplia concertación de fuerzas para oponerse a la dictadura militar.

Interesa discutir cuál es la capacidad de construir una alianza amplia bajo la hegemonía del movimiento popular, tomando en cuenta el impacto que los años de dictadura militar han tenido sobre los planos económicos, políticos y culturales y sobre la ideología y los valores, y las formas de organización y conciencia existentes antes de la imposición autoritaria.

Interesa discutir cuál es la capacidad del movimiento popular y de sus organizaciones de construir una “voluntad nacional popular” que recupere las tradiciones de lucha del pueblo, las distintas perspectivas políticas y “concepciones del mundo”, las diferencias culturales, regionales, incluso étnicas (nos referimos, por ejemplo, al nuevo tipo de inserción que ha tenido la minoría Mapuche en el movimiento popular desde el período de la Unidad Popular) y los nuevos planteamientos y formas de organización que surgen desde la base.

En este sentido, se destaca la necesidad de discutir la reorganización y rearticulación del movimiento popular y de sus organizaciones, así como el papel de formas “no tradicionales” de lucha y movilización desplegadas en situaciones excepcionales, con la consecuente incorporación de nuevos actores políticos a las luchas por la democracia, recuperando la validez del partido político como forma de organización a partir de demandas y situaciones nuevas.

Esto nos parece importante dado el sesgo que tomó la discusión sobre

la emergencia de los llamados nuevos sujetos sociales y políticos en el momento más álgido de la desarticulación de las formas de organización “tradicionales” —partidos y sindicatos—, la cual derivó en una posición antipartido frente al carácter espontaneísta y autónomo que tomaron las primeras protestas importantes contra la dictadura y que se llegaron a ver como formas de organización alternativa.

Queremos analizar esta situación a la luz de lo que ha sido la “politización” de esa protesta y de la reconstitución y rearticulación precisamente de partidos políticos y sindicatos, las nuevas circunstancias en las cuales se da dicho proceso y las tareas que en consecuencia se enfrentan, una de las cuales es indicar el carácter e importancia pero también los límites y alcances de movimientos heterogéneos y espontáneos.

En el presente trabajo se tratará de desarrollar y fundamentar la idea de que plantear el problema en términos de partido *versus* nuevos sujetos políticos es no entender sus respectivos campos de acción ni sus formas de interrelación posibles, pues esta posición genera más problemas de los que soluciona, limitando además la capacidad de entender los cambios socio-económicos, políticos y culturales habidos en la sociedad chilena en los últimos años.

Comprender rupturas y continuidades; diferenciar lo que ha cambiado de lo que es vigente, estableciendo relaciones y mediaciones, es un proceso necesario para entender las vías de “recuperación democrática” que se intentan y son posibles en ese país, así como sus formas, alcances y contenidos.

PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA DEL SUR. CARÁCTER DE LAS DICTADURAS MILITARES

Ante la profunda crisis económica y descrédito político que, a diferentes niveles, se expresan en el área, el ascenso de movimientos populares que buscan la más amplia concertación de fuerzas para oponerse a la dictadura militar —como es el caso de Chile; la vuelta a gobiernos civiles en Brasil, Argentina y Uruguay—, el problema de la democracia ha tomado un lugar fundamental en el debate tanto político e ideológico como académico.

La democracia no es un concepto estático ni ahistórico sino en constante transformación y replanteamiento, y con diversos significados según las fuerzas sociales y políticas que le dan contenido con las demandas, perspectivas y objetivos que esperan alcanzar y la capacidad para lograrlo.

En este sentido, no es lo mismo hablar de la crisis de sistemas e instituciones democrático-liberales —que llevaron a la instauración de dictaduras militares en algunos países sudamericanos a principios de los setenta— que hablar de procesos de recuperación democrática frente a dichas dictaduras a mediados de la década de los ochenta o tratar de explicar

el proceso de construcción de una democracia popular como el que se vive en Nicaragua.

Con esto también queremos plantear que hay fases históricamente diferenciadas de dominación burguesa en América Latina, que nos permiten distinguir formas democráticas de formas autoritarias en el ejercicio del poder.

Por esta razón no estamos de acuerdo con hablar en términos de Estados de excepción permanente como propone toda una línea teórica de análisis del Estado en América Latina, términos dentro de los cuales no habría esta posibilidad de matizar el análisis del Estado ni de establecer formas de dominación diferenciadas.¹

Establecer estos matices nos permitirá analizar con mayor precisión el carácter de los actuales procesos de recuperación democrática frente a lo que parece ser el agotamiento de las dictaduras militares del Cono Sur.

Habría que ubicar y definir el nuevo tipo de golpismo así como el nuevo papel que asumen los ejércitos latinoamericanos a partir de 1964.

Habría que preguntarse sobre el carácter de estos regímenes de excepción, por su naturaleza específica, por la racionalidad de su proyecto económico, político, ideológico y cultural. ¿Hasta qué punto se puede hablar del agotamiento de este tipo de regímenes autoritarios que permita plantear con viabilidad su sustitución, incluido el papel protagónico que las fuerzas armadas han asumido en dichos regímenes? ¿Se puede decir que ha fracasado el modelo económico neoliberal a partir de las necesidades de la nueva fase de acumulación capitalista?

¿Qué posibilidades de continuidad se han dado para el proceso cultural, ideológico y político en las condiciones de represión y desarticulación impuestas por las dictaduras militares en el interior y en el exterior por las condiciones que impone el exilio?

¿Cuál es la capacidad de sobrevivencia de la conciencia social y política en esas circunstancias?, ¿cómo es que surgen y se organizan los distintos actores sociales y políticos que buscan abrirse espacios de expresión, de participación, de defensa, de resistencia frente a formas de dominación autoritarias y cuál es su proceso de desarrollo y maduración?

¿Qué es lo que en suma ha pasado en esas sociedades, en todos los aspectos, luego de varios años de imposición de un proyecto autoritario, racional y a largo plazo?

Desde el golpe de Estado de 1964 contra el régimen de João Goulart en Brasil, parece haberse inaugurado una nueva etapa para América La-

¹ Véase por ejemplo Heinz Sonntag, "Hacia una teoría política del capitalismo periférico", en varios autores, *El Estado en el Capitalismo Contemporáneo*, México, Siglo XXI, 1977. Esto, independientemente de que los argumentos resultan muy sugerentes y de que es un esfuerzo notable e importante que ha hecho muchas aportaciones a la discusión de las formas de dominación y del Estado en las condiciones características del llamado capitalismo periférico.

tina, tanto en el nivel de la implementación de un nuevo modelo de acumulación y de una redefinición de la inserción de los países de la región al sistema capitalista mundial, como en cuanto a las formas de dominación que se expresan en una modalidad diferenciada históricamente de intervención militar, de golpismo en América Latina.

La instauración de dictaduras militares en el Cono Sur; la cancelación de proyectos democráticos y revolucionarios; el descabezamiento de las organizaciones populares, políticas y sindicales; la represión, persecución, asesinato, desaparición y exilio de miles de latinoamericanos comprometidos con los procesos de democratización, son situaciones que se pueden generalizar para la mayor parte de los países que nos ocupan. El hecho de que estas dictaduras surjan en un momento en el cual se vivía un auge del movimiento popular en diferentes niveles,² hacía aparecer los proyectos de dominación de dichas dictaduras como obedeciendo a objetivos y necesidades similares tanto en lo económico (garantizar la reproducción del capital por las vías que demandaba la forma de acumulación monopólica) como en lo político (desarticulación del movimiento popular).

Sin embargo, destacar las diferencias y las especificidades se vuelve fundamental para entender los procesos de democratización que se viven actualmente, la forma y carácter que han asumido y explicar el hecho de que a las fuerzas armadas chilenas aún no hayan llegado los aires democratizadores y "autocríticos" de sus congéneres.

Como lo señala Luis Maira, en una primera fase se mantuvo un análisis que caracterizaba de manera muy homogénea a los regímenes autoritarios sudamericanos, pero "a medida que los procesos autoritarios avanzaron, el impacto de los factores nacionales se hizo cada vez más profundo, y lo específico de cada proceso empezó a reemplazar a esta especie de teoría general con la que nos movíamos a mediados de los setenta".³

De ahí que sea necesario movernos en los dos niveles, es decir, por un lado, definiendo los rasgos y características que comparten estas dictaduras y, por otro, estableciendo sus manifestaciones nacionales.

El caso en el cual vamos a concentrar nuestro análisis, sin menoscabo de incluir como elementos de comparación otros casos nacionales, es el chileno, debido al carácter que asume el golpe militar en ese país y a las formas represivas y excluyentes en todos sentidos, de una dictadura que en toda su inflexibilidad ha sido, sin embargo, la más estable de la región.

² En Chile, la Unidad Popular propone un cambio radical en la organización social y política; Perú vive cambios impulsados por la fracción nacionalista y antiimperialista de las fuerzas armadas; un importante proceso de democratización encarnado en el Frente Amplio está marchando en el Uruguay; Juan José Torres encamina procesos similares en Bolivia y el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1973 marca una apertura política luego de regímenes militares de corte represivo.

³ Luis Maira, en varios, "La Democracia en América Latina" (mesa redonda), en *Nexos*, núm. 87, México, marzo de 1985, p. 22.

En ese contexto, la discusión abierta sobre la recuperación democrática en torno de la conformación de formas masivas de resistencia popular en un país donde la tradición democrática ha tenido un peso fundamental y en el que presenciamos la rearticulación de las organizaciones políticas y sindicales, junto a la persistencia de la dictadura, adquiere un interés particular.

DICTADURA MILITAR Y PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN. LO NUEVO, LO VIGENTE Y LO CAMBIANTE

La dictadura militar chilena, al igual que las otras dictaduras del Cono Sur, no han pretendido tener un carácter temporal ni transitorio, sino que han buscado proyectarse a más largo plazo, estableciendo una clara ruptura con la sociedad preexistente, con sus formas de organización social y política, con el ordenamiento jurídico institucional anterior y con los principios, ideas y valores antes prevalecientes.

Si bien estos fueron los objetivos compartidos por estos regímenes militares, no en todos los casos fueron alcanzados. Sin lugar a dudas, la dictadura chilena y su proyecto ha constituido el intento más serio, sistemático y exitoso de implantar un nuevo modo de dominación social y político.

Así lo advirtió la UP, ya en el exilio, en los primeros meses que siguieron al golpe de Estado al indicar que “el golpe militar chileno ha sido el intento más serio de este siglo, en Chile, para construir un sistema capitalista vinculado a las tendencias actuales del capitalismo de las empresas multinacionales, pues se trata de imponer un sistema ideológico que permita solventar culturalmente el proyecto de dominación”.⁴

En un interesante trabajo, Manuel A. Garretón plantea el problema en términos de lo que él ve como verdaderos intentos de “refundación” social y política por parte de estos regímenes, señalando cómo, en efecto, desaparece un tipo de sociedad, sus concepciones y modelos de acción política, frente a otros que pretenden sustituirlos, no restaurando viejos privilegios y poderes, sino buscando crear un orden nuevo que rompa radicalmente con el anterior. En este sentido, destaca “su intento fundacional, es decir, el proyecto de reorganizar el conjunto de la sociedad, de fundar un nuevo orden, de reestructurar y recomponer las bases del capitalismo nacional”.⁵

En Brasil hubo una preocupación constante del régimen militar por buscar formas de legitimación por distintos canales, pues a pesar de que, como lo señala Antonio Carlos Peixoto, el régimen militar jamás rompió

⁴ Documento de la Unidad Popular en el Exilio, *Excelsior*, 5 de abril de 1977.

⁵ Manuel A. Garretón, “Transformación social y refundación política en el capitalismo autoritario”, en varios autores, *Autoritarismo y Alternativas Populares en América Latina*, San José, FLACSO, VTRB, p. 144.

el pacto con sectores representativos del país, definiéndose una especie de acuerdo entre grupos políticos tradicionales donde el control quedó en manos de las fuerzas armadas,⁶ la crisis económica no brindó las bases suficientes como para seguir por este camino sin recurrir de nueva cuenta a los civiles.

También en el caso argentino, la dictadura militar instaurada en 1976 trató de proyectarse de manera mucho más permanente por medio de “un proyecto autoritario con evidentes pretensiones de afectar para siempre el sistema político argentino, socavando en la medida de sus posibilidades las bases de la democracia representativa”.⁷

La grave situación económica, aunada a la desafortunada aventura de las islas Malvinas, manifestó contradicciones en el seno del aparato de poder, abriendo un frente de crítica y manifestación del descontento que ha abierto la posibilidad de luchar por la democracia, pues como bien se dice “no hubo derrocamiento de la dictadura sino retirada estratégica de los militares”.⁸

En Argentina, de manera acaso más profunda que en países con experiencias similares, el sistema de terror logró permear a la sociedad en su conjunto.

Ante la derrota y desarticulación de las organizaciones populares; ante la genocida guerra sucia que entablaron las fuerzas armadas contra la población y ante la falta de solidaridad, por no decir complicidad por parte de la Iglesia y de las cúpulas sindicales y políticas tradicionales, “la pasividad quedó internalizada”⁹ y una de las pocas voces de crítica en medio del terror fue el de las llamadas locas madres de la Plaza de Mayo.

La junta militar chilena ha impulsado un nuevo patrón de reproducción de capitales altamente especializado y que favorece a un núcleo muy reducido de la actividad económica, afectando inclusive a sectores de la misma burguesía no vinculados a esta actividad, ya que se han eliminado todos los controles y regulaciones que tenían la función de proteger al mercado nacional.

Así, a partir de 1975, se empezaron a sentir los efectos de la nueva política económica, delineada por los llamados “Chicago Boys”, representantes de la tendencia neoliberal, con una ola de quiebras de medianas y pequeñas empresas dedicadas a la rama textil, al calzado, sector alimentario, venta de automóviles, construcción.

“Es una revolución capitalista sin parangón, realizada por la fuerza, contra la voluntad mayoritaria de la nación [...] Los consumidores hoy observan las vitrinas de las tiendas, que les ofrecen desde automóviles

⁶ A. C. Peixoto, “La democracia...”, *cit.* pp. 22-23.

⁷ J. A. Righi, “Elementos de análisis para la situación Argentina”, en varios, *El Control Político en el Cono Sur*, México, Siglo XXI, 1978, p. 207.

⁸ Carlos González Gartland, “Ejército y Sociedad”, en *Le Monde Diplomatique*, en español, febrero de 1984, p. 26.

⁹ *Ibid.*

japoneses y televisores de los más sofisticados modelos, hasta ropa usada, importada desde Estados Unidos.”¹⁰

También se ha reducido el gasto público a su mínima expresión en aquellos renglones tales como educación y servicios médicos gratuitos, trasladando al sector privado muchas de las funciones desempeñadas hasta entonces por el Estado y canalizando muchos de estos recursos a los gastos militares y a las funciones represivas del Estado.

Chile tiene el segundo lugar como país latinoamericano en importación de armas, destinando a tales efectos más de la mitad del ingreso que se obtiene por exportaciones; además desarrolla su propia industria de producción de armamento.¹¹

Así, la economía ha sido reestructurada siguiendo paso a paso los lineamientos de la economía de libre empresa o “economía social de mercado”, como gusta ser llamada por sus principales representantes: Harberger y Friedman, los mencionados “chicos” de Chicago.

Este proceso de reorganización económica ha descansado en las espaldas de las clases populares con tales costos sociales que la dictadura no ha podido sostenerse más que con la represión.

Este nuevo modelo de reordenación económica, aplicado con persistencia y con una racionalidad muy profunda, también presenta una gran coherencia en el plano social, como lo señala Sergio Bitar.

La minimización del sector industrial, las bajas tasas de salarios, la cesantía, el terror, son elementos que afectan el crecimiento del proletariado y sus organizaciones, que quiebran en algunos momentos la solidaridad de clase.

En Chile no está en juego una política económica sino la implantación de una nueva estructura económica; un nuevo modo de funcionamiento y de acumulación; nuevos valores [...] Ello explica la intransigencia y la insistencia en aplicar una política económica que es parte integrante de un esquema político global tendiente a realizar cambios sustantivos en la sociedad chilena.¹²

Los partidos políticos tradicionales han intentado ser suprimidos; se han suscitado nuevamente los principios de la guerra fría, exaltando la doctrina de la seguridad nacional; se reinterpreta la historia, rescatando aquellos valores patrios que pudieran brindar algún sustento ideológico para cumplir los objetivos de “salvación”, “unidad nacional”, “refundación”, en el marco de una democracia “controlada”, “depurada” de sus vicios; ya lo dijo Pinochet en la declaración de principios de la junta: no somos un paréntesis entre un gobierno y otro.

Se intenta borrar de la conciencia toda la cultura política anterior,

¹⁰ Revista *Mensaje*, citada en *El Día*, México, 11 de septiembre de 1979, p. 10.

¹¹ *Excelsior*, México, 30 de enero de 1986, p. 27.

¹² Sergio Bitar, “Libertad económica y dictadura política. La Junta militar chilena, 1973-1978”, en *Comercio Exterior*, vol. 29, núm. 10, México, octubre de 1979, p. 1082.

no sólo mediante la represión, sino también por medio de la difusión de los nuevos valores, a través de los medios de comunicación y la educación, que tiende a ser elitista, tratando de imponer un proyecto de desmovilización y despolitización.

La despolitización aparece como eje fundamental de sus deseos de fundar una nueva sociedad. Con todos estos elementos, se va configurando un Estado muy cerrado y excluyente en lo político, social, económico, cultural, sin mucha capacidad para incorporar a sectores más amplios. La junta militar chilena no ha logrado constituir, como lo pretendía, un movimiento "cívico nacional" de apoyo.

Tampoco parece que pueda haber cambios en el rígido modelo económico y político que permitan sustentar una apertura controlada; el recurso de la represión ha seguido siendo el medio prioritario de control político, ante el fallido diálogo intentado con un sector de la oposición, la Alianza Democrática, AD, hegemonizada por la Democracia Cristiana.

Para entender la persistencia de la junta militar, a pesar de la crisis económica, de cierto distanciamiento por parte de sectores de la burguesía con respecto a Pinochet, del proceso de articulación de un importante movimiento de protesta y oposición bastante amplio, hay que recurrir a las modalidades específicas de dominación autoritaria en ese país.

Una primera diferencia que podemos establecer entre las distintas dictaduras conosureñas de los años setenta es la estructura misma de las fuerzas armadas y su relación con el conjunto de la sociedad.

En Chile salta a la vista una estructura militar más jerárquica, vertical y prusiana, donde la ideología del apoliticismo en las fuerzas armadas desempeña un papel muy importante. Este factor ha favorecido la concentración del poder, su personalización en la figura de Pinochet.

En Argentina, estamos ante un ejército fundamentalmente deliberativo, politizado, lo cual permite un juego mucho mayor entre las diversas fracciones militares.

También en Uruguay y Brasil hay mayor permeabilidad de la cúpula militar a las presiones que llegan de la sociedad.

En Chile, la autonomización, la división del ejército con respecto a la sociedad ha sido muy tajante, muy profunda.¹³

Otro factor a tomar en cuenta es el grado de movilización popular que se alcanzó en Chile durante la Unidad Popular y al hecho de la existencia de una izquierda bien organizada y con un fuerte peso político e ideológico.

Hay que recordar que el movimiento obrero y popular alcanza un alto grado de organización y desarrollo político llegándose a expresar en un proyecto alternativo por medio de sus partidos y organizaciones sindicales.

Lo específico en el caso chileno es que este proyecto de cambio nace muy enmarcado en la misma institucionalidad burguesa, por lo que se propone construir el socialismo respetando los procedimientos institucionali-

¹³ Véase "La democracia...", *cit.*

zados, inaugurando lo que parecía ser un camino inédito al socialismo al conquistar el gobierno por vía electoral.

El alto grado de institucionalidad de los procedimientos políticos; la capacidad organizativa de las clases para representar sus intereses; la validez que se otorgaba al camino electoral como forma de lucha revolucionaria por la misma experiencia popular, entre otros elementos, fueron consolidando todo un sistema de valores que hacían confiar en la posibilidad de utilizar al propio Estado burgués para provocar su propio cambio a través de sus mecanismos democráticos.

Éste es un elemento a ser tomado en cuenta pues como la indica Insulza: “En un país en que la tradición democrática ha creado hábitos de lucha y representación institucional, la desarticulación de la sociedad civil constituyó un primer factor de retraso en la lucha contra la dictadura y una de las principales tareas abordadas en los últimos años ha sido la de su reconstrucción.”¹⁴

LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN CHILE

Con estos elementos muy generales, podemos discutir las formas que asume la lucha por la democracia en el caso chileno.

Sin duda, luego de 12 años de dictadura militar y de aplicación de su proyecto económico y político ha habido cambios profundos en el esquema institucional antes vigente, que afectan a las nuevas generaciones a las cuales se ha intentado inculcar una “nueva mentalidad”.

La destrucción de la institucionalidad democrática no sólo afectó la forma de organización estatal sino la existencia de una “red de múltiples organizaciones que se articulaban desde el nivel local hasta el nacional, siendo canales efectivos de participación. Este proceso incluye a las organizaciones de los sectores que apoyaron el golpe porque lo incompatible con el proyecto militar era precisamente esa forma de organización”.¹⁵

En estas condiciones tienden a darse ciertas formas de representación corporativa de “diferenciación natural” que puede llegar a tener una expresión formal siempre y cuando excluya la lucha política legal.

Lo que es esencial en un orden corporativo es que [...] el cierre de los canales específicamente políticos produce un efecto de reconversión y transferencia de la representación de los intereses políticos hacia instituciones tales como gremios patronales y profesionales, los sindicatos obreros legalmente autorizados, las fuerzas armadas, las instituciones religiosas, las organizaciones locales de base territorial y otras.¹⁶

¹⁴ José Miguel Insulza, “Chile: los obstáculos de la Democracia”, en *Excelsior*, 11 de septiembre de 1984.

¹⁵ *Idem.*

¹⁶ Jorge Graciarena, “Transformaciones del Estado y contradicciones del desarrollo latinoamericano: una interpretación”, mimeo., s/f, p. 100.

Esto se corresponde en el nivel institucional con los cambios ocurridos en la relación cívico militar y el nuevo papel que tienen las fuerzas armadas en el Estado. Como señala Carlos Portales, las fuerzas armadas se han transformado durante su estancia en el poder; incluyendo el caso peruano, se han profesionalizado y burocratizado y han copado y militarizado al aparato estatal, lo cual genera aún más problemas a las fuerzas democráticas en su tarea de “desmontar” el poder militar.¹⁷

En otros órdenes, el modelo económico ha producido cambios en la misma estructura de clases, en el peso relativo del proletariado industrial, el cual ha disminuido, en las capas medias sometidas al proceso de “desburocratización” que se vive en muchos países de América Latina por medio de despidos masivos.

Importantes sectores de la burguesía también se han visto afectados por la recesión económica y el desmantelamiento virtual de la industria nacional, y en general las otras capas de la población han sufrido un proceso de mayor desigualdad en la distribución del ingreso, de aumento de la cesantía, y de un descenso generalizado en la calidad de la vida.

Es obvio que la situación social y las formas de organización y de conciencia han tenido que cambiar. Sin embargo, una cosa son los objetivos que se plantearon y otra el logro de los mismos. La dictadura militar ha hecho mucho daño al movimiento popular organizado al descabezar a partidos y sindicatos pero no los acabó ni ha podido impedir su paulatina rearticulación.

A pesar de los métodos fascistas de represión, los pueblos encuentran formas de resistencia, de expresión, de sobrevivencia; formas que se expresan de manera más o menos abierta o clandestina, según las circunstancias.

Los gobiernos autoritarios como el chileno han buscado bloquear el desarrollo o rearticulación de organizaciones representativas, pero el mismo modelo de desarrollo tiende a generar fuertes tensiones y conflictos que no pueden ser ni absorbidos ni canalizados, por lo cual el surgimiento espontáneo de nuevas fuerzas políticas es inevitable.

Los espacios que el pueblo chileno va conquistando —en muchos momentos necesariamente al margen de partidos y sindicatos, por razones obvias, en un proceso que tiende sin embargo a recuperarlos, aunque de manera diferente— son producto de la incapacidad de la junta militar para paralizar a toda la población, para aniquilar la capacidad de lucha de un movimiento popular que resiste en todos los terrenos buscando nuevas formas de expresión.

A esto se refiere Garretón en el trabajo ya citado cuando señala la aparición de nuevos actores y sujetos sociales en relación de continuidad y ruptura con los del pasado y en el marco de nuevas contradicciones, donde la identidad se reconstruye en términos de esas nuevas luchas y contradicciones.

¹⁷ Carlos Portales, “La democracia...”, *cit.*, p. 27.

Es en ese contexto donde debemos ubicar el análisis de lo que fueron las primeras jornadas de protesta, su carácter espontaneísta y después su posterior definición ideológica y política, aún en proceso.

En efecto, las primeras jornadas de protesta¹⁸ fueron producto de la crisis económica y tuvieron un carácter bastante heterogéneo y espontáneo que se manifiesta en términos de un frente muy amplio en el cual participan mineros, transportistas, comerciantes, pobladores, pequeños y medianos industriales afectados, productores de trigo y empleados.

El hecho de que estas jornadas de protesta fueran convocadas al margen de los partidos políticos expresaba la situación de desarticulación que vivían los partidos de izquierda, la pérdida de los vínculos orgánicos con sus bases, la consecuente separación de actores políticos y actores sociales.

Todo esto dio origen a que, como lo señala Yocelevzky, se analizara la situación en términos de la pérdida de la vigencia histórica del partido como modelo orgánico y se cuestionara la representatividad social y política de los partidos de izquierda.

Argumentando el carácter espontáneo de la protesta, se planteó que ésta debía ser canalizada por organizaciones de nuevo tipo y no por los partidos.¹⁹

La crítica a los partidos que se genera en primera instancia en la derecha, es asumida por importantes sectores de izquierda en un momento de profunda crisis de los partidos políticos.

En ese contexto, se analiza la constitución de los nuevos sujetos políticos y sociales, pero al margen de su contenido de clase, y se proponen como alternativas políticas a los partidos, señalando la inviabilidad de estos últimos.

Se destaca la crisis de la izquierda, su incapacidad política, los marcos rígidos en donde se mueve, frente a lo cual se plantea la necesidad de que surja un tejido organizacional de nuevo tipo, pues la unidad de lo popular sólo podría volver a constituirse "en el interior de una red de organizaciones sociales de masas a la cual se le ha devuelto su capacidad de decisión política".²⁰

Desde luego que esta posición abarca muchas tendencias y matices que van desde la renovación de los partidos hasta su inviabilidad, pero nos interesa poner énfasis en el aspecto más cuestionador.

¹⁸ La primera fue el 11 de mayo de 1983, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, pero a la que concurrieron sectores muy heterogéneos; luego, la segunda, el 14 de junio del mismo año, convocada por el Comando Nacional de Trabajadores y la del 12 de julio de 1984, donde ya la fuerza central es la Democracia Cristiana.

¹⁹ Ricardo Yocelevzky, *La Democracia Cristiana Chilena. Trayectoria de un proyecto*, FLACSO, Cuadernos de trabajo, núm. 9, enero de 1985, serie B: Estado, Democracia y Movimientos sociales en América Latina, p. 78.

²⁰ Augusto Varas, "Crisis política y alternativas Democráticas: Límites y perspectivas de la izquierda chilena", en *Autoritarismo y...*, cit., p. 198.

¿PARTIDO *versus* NUEVO SUJETO HISTÓRICO?

Mucho se ha insistido en el análisis social y político sobre la emergencia de nuevas formas de organización desde la base, de tejidos organizativos de nuevo tipo, de movimientos autogestionarios, de grupos que plantean otras demandas, de nuevos sujetos políticos.

El surgimiento de estos nuevos movimientos de base que se articulan con distintas demandas y perspectivas (cuestión que trasciende el ámbito chileno) ha sido explicado por el agotamiento del llamado Estado de compromiso y su incapacidad para canalizar las fuerzas sociales que iba generando el mismo desarrollo económico.

Este fenómeno está en el fondo del surgimiento de los Estados autoritarios pues, como dice Graciarena, la lucha por un modelo democrático y pluralista basado en un acuerdo relativamente amplio de grupos e intereses hacia formas de participación y equidad social —característico del Estado desarrollista— entra en crisis frente a un Estado cuya capacidad de arbitraje no puede incorporar masivamente las demandas y expectativas que él mismo generó.

En cierta perspectiva, estos movimientos de base tienden a ser vistos como formas alternativas de organización frente al Estado o más bien frente al aparato de Estado, pero también alternativos con respecto a los partidos políticos y sindicatos, por considerar a éstos como formas de organización tradicional que no han sabido expresar intereses emergentes al margen del proletariado propiamente dicho.

Las mismas contradicciones generadas por el modelo de desarrollo capitalista seguido en América Latina, aunado a la crisis de la democracia representativa, se dice, se traducen en nuevas modalidades de organización; en la búsqueda de un nivel superior de democratización del Estado y la sociedad misma, y como potencialmente capaces de formular un proyecto más coherente y global y de fundamentar un nuevo pacto social.²¹

Desde luego que estos fenómenos existen y necesitan ser incorporados no sólo en el análisis sino en la práctica misma. Ya hemos hablado de que muchos autores han puesto énfasis y con justeza en el hecho de que los cambios ocurridos luego del intento de imponer una nueva forma de organización social y política debe llevarnos a considerar qué transformaciones han operado, y a asumir que la simple restauración o reorganización sobre las bases anteriores al golpe simplemente es imposible.

Además, consideramos que el surgimiento de formas de organización no convencional o no tradicionales, de carácter más bien espontáneo y heterogéneo, adquiere mucha importancia bajo condiciones impuestas por dictaduras militares, como la chilena, donde partidos, sindicatos y demás formas de organización han sido canceladas, o aun en situaciones excepcionales, de crisis.

²¹ Véase por ejemplo R. de la Cruz, "Nuevos Movimientos Sociales", en *El Día*, 28 y 29 de agosto de 1985, sección Documentos.

Son movimientos de resistencia frente al autoritarismo que se vuelven fundamentales como ejes articuladores de distintas demandas y protestas, de cierta conciencia política y social, a falta de canales establecidos, y que en Chile han sido la base para rearticular las formas de organización supuestamente suprimidas.

Nos referimos, por ejemplo, a organizaciones y agrupaciones de colonos, pobladores, campesinos, movimientos de desocupados, movimientos en pro de los derechos humanos y comunidades cristianas. También a organizaciones gremiales, universitarias, sindicales, de artistas, de familiares de presos y desaparecidos.

Es una amplia gama de movimientos y organizaciones que van desde las formas más elementales de la defensa de la vida y del salario, hasta organizaciones más de tipo cupular, como las de la Iglesia o como el llamado “grupo de los 24”, integrado por juristas, rectores, universitarios, profesores, profesionales, de distintas concepciones políticas que se han constituido como grupo de estudios constitucionales, proponiendo reformas y alternativas a la constitucionalidad implantada por la junta militar.

Las formas de lucha que surgen de esta amplia gama de organizaciones son también muy variadas y van desde la resistencia pasiva hasta las huelgas de hambre; desde paros de labores —a partir de 1980 aproximadamente— y manifestaciones, hasta actos guerrilleros, como los protagonizados recientemente por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Si hoy en día existe una rearticulación de partidos políticos y organizaciones sindicales; si la protesta se ha politizado; si la denuncia es más abierta, las bases que permitieron esta nueva fase de la resistencia están en esas formas elementales que permitieron mantener soterradamente, clandestinamente, formas de conciencia, de expresión, de búsqueda de lenguajes y metalenguajes.

Así, tenemos el trabajo desarrollado por mujeres chilenas que para complementar el presupuesto familiar, trabajan en talleres creados por la Iglesia donde tejen carpetas, abrigos, manteles y “arpilleras” (gobelinos) con paisaje y con “mensaje”.

En un trozo de manta bordan casitas, prisioncitas, campitos de concentración, escuelitas, y pegan muñequitos de trapo que son obreros, presos políticos, desaparecidos, niños desnutridos, mujeres proletarias, y a esto le añaden letreritos que demandan el derecho a la salud, a la felicidad, al trabajo, a la libertad de expresión, a la vida, en una palabra.²²

También en la literatura, en la dramaturgia, encontramos esta búsqueda de formas de expresar la situación que padece el pueblo chileno, y a la vez evitar la represión. Ejemplo de esto es la labor desplegada por grupos de teatro como Ictus o El Aleph —el cual fue duramente reprimido por la dictadura.

Según palabras de Raúl Osorio, ex integrante de El Aleph, las obras

²² *Unomásuno*, México, 27 de junio de 1980.

de teatro chilenas hoy en día, tienen la particularidad de estar “reflejando, rescatando situaciones, personajes, conflictos de nuestra realidad, que coinciden en nuestro interés como grupo de teatro de registrar el acontecer diario de nuestro país [...] El teatro chileno en los últimos diez años se ha avocado a referirse a una realidad concreta, y eso lo ha llevado a realizar en algunos sectores una estética hiperrealista [...] especies de parábolas con la forma teatral, provocando que las obras puedan ser ‘leídas’ de muchas maneras por la gente”.²³

O ¿qué decir de las formas de resistencia de “la parte más humillada de la población chilena”, la etnia mapuche, que ha tenido que resistir una política genocida y racista por parte de la dictadura militar?

He aquí un claro ejemplo de un nuevo actor político, que se inserta como tal en el movimiento popular a partir del gobierno de la Unidad Popular, durante el cual hay un proceso de maduración de conciencia de clase de una etnia que ahora participa en los movimientos populares del pueblo chileno, en su lucha por la democracia, pero manteniendo sus reivindicaciones étnicas y culturales, luchando porque se valore y respete al mapuche como persona.

El modelo económico implantado por la junta militar al servicio del capital monopólico nacional y extranjero, que genera condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión para la mayoría del pueblo chileno, ha acentuado además una política discriminatoria y racista hacia estos sectores con el claro objeto de “liquidar” de una vez la cuestión mapuche y terminar de arrebatárles sus tierras.

Si en general ha existido una gran deficiencia por parte de los distintos gobiernos nacionales así como por parte de los partidos políticos de izquierda en cuanto a la comprensión de las necesidades no sólo económicas sino también culturales específicas de las minorías étnicas nacionales, se lograron muy importantes avances entre 1968 y 1973 que ahora se han perdido por completo.

Bajo la afirmación de que “En Chile todos somos chilenos”, la junta militar busca impedir, en forma arbitraria y por decreto (la eliminación por decreto del pueblo Mapuche es el núm. 2568 de marzo de 1979) que que existan más indígenas en el país, prohibiendo la existencia de organizaciones que se hagan llamar representantes de grupos étnicos y negándoles el derecho de que se llamen, a sí mismos, Mapuches.

Como símbolo de esta política represiva y racista de los militares chilenos, se acaba de erigir una estatua a Nicolás Palacios, autor de un libro llamado *La Raza Chilena* que se convirtió en un verdadero *best seller* allá por el año de 1911.

Como lo pudo constatar Miguel Littin, cineasta chileno que hizo un viaje a su país de origen de manera clandestina: “En Santiago, filmamos largamente un nuevo monumento: la estatua de don Nicolás Palacios, erigida sobre la plaza Santa-Cruz. Palacios escribió *La Raza Chilena*, un libro

²³ *El Día*, México, 25 de agosto de 1985, p. 21.

en el que pretende que los chilenos son superiores a todos los otros latino-americanos porque descienden directamente de los Helenos. Hace algunos años, ninguna persona conocía la existencia de don Nicolás Palacios. Pero ahora, sobre la Avenida Bernardo O'Higgins, arteria principal de Santiago, el general Pinochet le ha hecho edificar un monumento" (Miguel Littin, *Le Nouvel Observateur*, 6-12 de septiembre de 1985, p. 34).

En efecto, se trata de nuevos sujetos políticos; sin embargo, no nos parece que se pueda plantear el problema en términos de antagonismo partido político-nuevo sujeto histórico.

La crítica que sobre el supuesto monopolio de la organización tendría el partido político no es nueva. En Chile tiene momentos de expresión significativos en distintas coyunturas históricas.

Recordemos, por ejemplo, la vuelta de Carlos Ibáñez al poder en los años cincuenta. Con el quiebre del Frente Popular y el desprestigio y crisis que viven los partidos políticos que en una u otra forma participaron en él, surgen fuertes sentimientos antiparlamentarios y antipartidos.

El general Ibáñez logra capitalizar este descontento, propiciando la emergencia de un breve movimiento social muy heterogéneo, de corte caudillista y populista.

Ibáñez logró movilizar a importantes sectores, hasta entonces marginados de la vida sociopolítica, atrayendo a otros más con su llamado a una "regeneración moral" que barrera la corrupción, lo cual fue decisivo en su triunfo en 1952.

Su ideología clamaba ser apolítica, lanzándolo contra partidos de derecha, de centro y de izquierda, por igual, y contra el orden establecido en general, sin embargo, lo hacía de manera ambigua y sin ofrecer una alternativa real.

En síntesis, el ibañismo dio origen a un efímero movimiento al margen de los partidos y de las organizaciones sindicales tradicionales, representando, de esta manera, la primera irrupción masiva de los marginados en la escena política.

Ante la debilidad orgánica y extremada heterogeneidad del movimiento protagonizado por Ibáñez; ante la falta de perspectivas a más largo plazo y la inexistencia de un programa coherente; ante la incapacidad de establecer alguna forma de organización alternativa a partidos y sindicatos, el general cae, junto con los precios del cobre, recuperándose pronto la unidad política y sindical y la estructura organizativa anterior.²⁴

Un planteamiento más coherente sobre este problema lo vamos a encontrar en la Democracia Cristiana. A decir de Yocelvezky: "La primera tesis que afirma la 'incapacidad' del sistema de partidos, de los modelos

²⁴ Esta recuperación se da en un nivel superior, pues en 1953 se conforma la Central Única de Chile, CUC, y en 1956 se crea el FRAP, con el Partido Comunista y el Socialista, como ejes de tal alianza, a diferencia del lugar que ocupaban en el Frente Popular.

orgánicos e ideológicos vigentes, para representar a sectores importantes de la sociedad es la teoría de la marginalidad (propuesta por la DC).”²⁵

Y es cierto. El proyecto demócrata cristiano y su búsqueda de una tercera vía que rechaza categóricamente la idea de lucha de clases, se inclina por un concepto comunitario o corporativo de sociedad, ambiguamente definido por sus ideólogos donde van a recuperar el problema de la marginalidad, es decir, la necesidad de dar expresión y formas de organización a los sectores marginados con el objeto de generar las bases sociales suficientes a otra forma de organización.

En el modelo comunitario propuesto, el Estado sería la expresión de una sociedad organizada sobre la base del individuo, de la familia, la municipalidad, el grupo, la cooperativa, el negocio, la región, es decir, de formas de organización “intermedias” y no el centro de poder predominante que controla la vida de la nación. En este contexto, el sindicato, por ejemplo, debería verse libre de interferencias políticas, estatales o patronales.

En realidad hay que ver los objetivos de este modelo organizacional alternativo a la luz de la realidad social y política en la cual se insertaba la Democracia Cristiana. Y es que su modelo de sindicato apolítico sólo se entiende si recordamos la escasa o nula influencia que tenía el PDC en el campo sindical, pues los sindicatos estaban mayoritariamente vinculados con los partidos Socialista y Comunista.

Fue el peso ideológico y político de los partidos de izquierda lo que provocó que la DC levantara como bandera la incorporación de los “marginados”, dentro de los cuales estaban todos aquellos sectores surgidos con el desarrollo económico industrializante (campesinos pobres, habitantes de callampas, desempleados, etcétera), política que fue puntal en el desarrollo de su programa.

Siguiendo estos lineamientos, el PDC creó varios grupos comunitarios bajo su propio control como los centros de madres, los grupos deportivos, cooperativos, en fin, entidades a través de las cuales el pueblo estaría participando en el poder.

En cuanto al campesinado, marginado por completo de los beneficios del desarrollo económico y político, la DC propone integrarlo en la vida nacional a través de la reforma agraria y por medio de comités y cooperativas que junto con el sindicato agrario comprenderían las formas básicas de organización para la población rural.

Éste era desde luego un intento muy sofisticado de atraer apoyo masivo a un partido capitalista y de generar un modelo de organización alternativa restándole así base social a los partidos y organizaciones tradicionales, que para la DC representaban a sectores “privilegiados” de los trabajadores. El intento fracasó y el sistema de organización vigente se fortaleció.

Si bien la DC logró generarse apoyo político; si bien se crearon organismos comunistas como las juntas de vecinos, los centros de madres y los

²⁵ Yocelzky, “La Democracia...”, *op. cit.*, p. 58.

sindicatos campesinos, dichas organizaciones “no alcanzaron a derivar en otra estructura de participación y representación que rivalizara y se complementara con las agencias tradicionales: partidos, asociaciones gremiales, sindicales [...] esas estructuras de poder continuaron pesando mucho más que la masa multitudinaria”.²⁶

Tal parece que actualmente estamos viviendo un proceso similar. Luego del carácter espontáneo de las jornadas de protesta contra la dictadura militar, iniciadas en 1983, éstas han tendido a politizarse, siendo precisamente el partido la forma de organización privilegiada en la rearticulación de la oposición.

Si en una primera instancia esas primeras jornadas señalan la debilidad orgánica de los partidos, también son la base de su reconstrucción. Junto a su importancia, hay que señalar los límites.

Al principio de este movimiento, los diversos sectores que intervienen no logran desprenderse de cierta participación corporativa ni de sus demandas específicas, por lo cual la unidad momentánea no llega a plantear en sí misma alguna forma de organización alternativa.

Además, dicha unidad es quebrantada no sólo por su misma heterogeneidad, sino porque la junta militar decide negociar sectorialmente, por un lado satisfaciendo demandas de sectores que habían gravitado a su alrededor como transportistas, comerciantes, capas medias, pero por otro, endurece su postura frente a los sectores populares que siguen siendo la mayor amenaza para el régimen. Y esto, entre otras razones, porque la convocatoria partió de dichos sectores.

Los límites a la acción espontánea están en la base de la rearticulación de las organizaciones tradicionales, tomando como eje la democratización y la búsqueda de un amplio consenso en torno de la oposición a la dictadura, pero hasta hoy no se ha tenido la capacidad de conformar un bloque opositor único.

Primero se conforma la Alianza Democrática, AD, bajo la hegemonía de la DC donde convergen la llamada derecha republicana, los socialdemócratas (Luis Bossay), el Partido Radical (Anselmo Sule), Partido Socialista Chileno (Briones) y el Mapu oc (Oscar A. Garretón).²⁷

La Democracia Cristiana trató de ser el eje de una oposición que veía amplia y heterogénea y sin la presencia de la izquierda organizada; pero, como dice Yocelevzky, la desarticulación de los partidos con respecto a sus bases no era tan profunda como para que la DC pudiera llenar un vacío político absoluto.

Si la AD no ha aceptado alianzas con la izquierda, a excepción de sectores más socialdemócratas, es porque ha dado prioridad a la reconstrucción de la derecha opositora, pero en el mismo terreno de la dictadura, dispu-

²⁶ Aníbal Pinto, “Desarrollo económico y relaciones sociales”, en *Aportes*, núm. 20, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, París, abril de 1971, p. 47.

²⁷ Francisco Zapata, “Actores sociales y fuerzas políticas en Chile”, en *Le Monde Diplomatique* en español, diciembre de 1984, p. 37.

tándole sus bases de apoyo. En esto, el autor citado ve el objetivo indudable por parte de la DC de reconstruir el sistema político anterior a 1973 pero ya sin la izquierda.²⁸

Este rechazo de la AD a establecer alianzas con otros sectores de la izquierda (la izquierda “violenta”) lleva a conformar el Movimiento Democrático Popular, MDP, conformado por el Partido Socialista Chileno (Almeyda), el Partido Comunista y el MIR.

Por otra parte se constituye paralelamente el Bloque Socialista (PECH) (Briones); MAPU; Grupo por la Convergencia Socialista; Izquierda Cristiana (Luis Maira); (MAPU OC) que se adhiere a la AD y no al MDP.²⁹

Llama la atención que, a medida que avanza este proceso, se viva la reconstrucción de lo que Aníbal Pinto denominaba el esquema triangular de fuerzas.

Clodomiro Almeyda señala esta tendencia a “reproducir la tradicional reagrupación de los políticos chilenos de los últimos decenios, en que las fuerzas políticas se nucleaban alrededor de tres polos más o menos equivalentes en fuerza social y expresión electoral: derecha, centro e izquierda, desempeñando el centro —demócrata cristianos y radicales— el papel de árbitros y componedores de los conflictos sociales y políticos”.³⁰

Esto se explica en cierta medida por la situación de desarticulación que privaba en los partidos y por la necesidad de recuperarse primero, restablecer sus vínculos orgánicos, volver a conquistar espacios perdidos, pero también explica por qué no se ha podido, por parte de ninguna de esas fuerzas, construir alguna alternativa amplia a la dictadura, implicando también riesgos de reproducir viejos vicios e incapacidades e intentar recuperar formas de organización anteriores al golpe y nada más.

Si bien los bloques constituyen el campo que hace posible la recomposición partidaria, también ha significado una especie de parálisis de la protesta por los cauces asumidos por esta recomposición que han acentuado el carácter cupular y la reconstrucción de cada partido por separado, diluyendo “la protesta social en el juego elitista que excluye las manifestaciones de la representatividad social de los actores políticos”.³¹

Sin embargo, a pesar de esta situación, se registran avances notables en la búsqueda de unidad de la izquierda y en los pasos tendientes a lograr la conformación de una alianza más amplia, como producto de la presión de las bases.

A pesar de que la Democracia Cristiana insiste en jugar su carta de opción excluyendo a la izquierda y de que hace dramáticos llamados a las Fuerzas Armadas para que acepten los términos del “Acuerdo Nacional”

²⁸ R. Yocelvezky, “La democracia...”, *cit.*, p. 76.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Clodomiro Almeyda, “El proceso de recuperación democrática en Chile”, *mimeo.*, s/f, p. 7-8.

³¹ R. Yocelvezky, “La democracia...”, *cit.*, pp. 81-82.

so pena de abrirle el campo a sectores de oposición mucho más radicalizados, se registran cambios importantes en la correlación de fuerzas.

El llamado "Acuerdo Nacional para la transición a la plena Democracia" surgió a raíz de una convocatoria de la Iglesia con la participación de varias corrientes políticas de derecha, centro e izquierda, aunque excluyendo al MDP.

Se dijo que un apoyo importante a ese acuerdo eran los propios Estados Unidos, por medio de su embajador Harry Barnes, quien ha impulsado lo que él llama una "diplomacia activa" en la búsqueda de una fórmula de intercambio que le asegure sus intereses a Estados Unidos.

La respuesta oficial al "acuerdo" fue contundente: "no hay regreso". El ministro secretario general de gobierno Francisco Cuadra manifestó que "mientras la oposición mantenga (a pesar del acuerdo) la política de movilización social y de desobediencia civil [...] por razones históricas es altamente improbable que el acuerdo pudiera asegurar la gobernabilidad del país".³²

Además, dicho acuerdo se ha empezado a desgastar por su política de exclusión de importantes sectores de la izquierda, pues ya hasta sectores de derecha de la AD entienden la necesidad de una concertación amplia y sin exclusiones.

Así, los comités pro derechos humanos estadounidenses en un extenso informe que cubre la política de Estados Unidos hacia 27 países, señalaron que "mientras Estados Unidos no acepte que los comunistas chilenos son legítimos participantes en el sistema democrático [...] seguirá actuando ambiguamente hacia la restauración de la democracia en Chile".³³

En ese contexto de cambios, el Partido Socialista (Briones) anunció su "retiro temporal" de la AD, debido al fracaso de las gestiones para lograr una estrategia unitaria de la oposición,³⁴ el Partido Radical y el Partido Comunista de Chile comenzaron una ronda de conversaciones destinadas a lograr puntos de acuerdo³⁵ y se conforma la llamada Intransigencia Democrática, con participación del Comando Nacional de Trabajadores y diversas organizaciones políticas que se pronuncian por una "unidad sin exclusiones".³⁶

A raíz de esta situación, Armando Jaramillo, personero de la llamada derecha republicana que forma parte de la AD, respaldó la formación de un coordinador de la movilización social opositora, acordado por el MDP y el PR.

Jaramillo opinó que esto es de "extraordinaria importancia para unificar el proceso de movilización social opositor" añadiendo que "El éxito

³² *El Día*, México, 15 de octubre de 1985, p. 16.

³³ *Ibid.*, 31 de enero de 1986, p. 17.

³⁴ *El Día*, 23 de enero de 1986.

³⁵ *Idem.*, 2 de febrero de 1986.

³⁶ *Idem.*, 16 de febrero de 1986.

en Haití fue precisamente porque hubo una movilización social racional, ordenada y unitaria".³⁷

Otro dato de suma importancia es el afán de restituir la unidad orgánica del Partido Socialista Chileno a través de sus dos principales corrientes, entrando en una acelerada fase de recomposición.³⁸

El presente año de 1986 es visto por todos los sectores opositores como un año clave. Así también se rearticula el movimiento sindical que anuncia una huelga nacional política y que se ha planteado: "Desarrollar nuestra propia fuerza y articularnos con otros sectores políticos y sociales para luchar por la democracia [...] elevar el número de trabajadores organizados y hacer un esfuerzo para que se valore el rol del sindicato dentro de la sociedad [...] buscar fórmulas de acción con otros sectores en una constante movilización social y política hasta poner fin a la dictadura."³⁹

Por su parte, la Federación de Colegios Profesionales de Chile, que agrupa a 25 de los gremios más importantes del país, señaló que 1986 será el año de la concertación.⁴⁰

Ante esta ola de anuncios por parte de la oposición, el gobierno de Pinochet ya ha tomado sus providencias, buscando la desarticulación de gremios y movimientos más contestatarios.

Uno de ellos es justamente el de los colegios profesionales, donde se destaca el Colegio Médico de Chile, el cual ha sido duramente reprimido.

Otro es la búsqueda de medidas para desarticular el movimiento estudiantil que en 1985 se destacó como el grupo más compacto y homogéneo. Para eso se ha seguido una política de despidos masivos de profesores y medidas disciplinarias contra los estudiantes.

Se sabe también que desde las jornadas de protesta, un blanco preferido por la dictadura ha sido el movimiento obrero, el cual ha sido perseguido y sus líderes encarcelados.

A MANERA DE CONCLUSIONES

No es casual que la reorganización de la oposición se dé a través de la reconstitución de los partidos políticos y organizaciones sindicales, pero si hemos reconsiderado la validez del partido político pues no ha agotado su capacidad de ser el eje, real y potencial articulador de distintas fuerzas, demandas y perspectivas, también hemos destacado la necesidad de entender las nuevas circunstancias en donde se inscribe la rearticulación de la oposición, las tareas que enfrentan los partidos políticos frente a éstas y frente a los nuevos actores y sus demandas.

³⁷ *La Jornada*, 12 de febrero de 1986.

³⁸ *El Día*, 5 de febrero de 1986.

³⁹ *Idem*.

⁴⁰ *El Día*, 3 de febrero de 1986.

Si bien las luchas de resistencia son muy valiosas e importantes, y por sí mismas no pueden articularse nacionalmente ni trascender sus reivindicaciones inmediatas, locales, regionales, culturales, gremiales, corporativas, los partidos políticos tampoco pueden minimizarlas.

Los partidos políticos de izquierda que luchan por la democracia deberían encontrar las vías de articular a estos actores políticos, expresar sus reivindicaciones y al mismo tiempo darles su campo, su autonomía, pero en un proyecto nacional democrático de nuevo tipo y no simplemente restauracionista donde concluyan todas las formas de luchas populares.

La crítica a lo que ha sido hasta ahora la incapacidad de la izquierda organizada para entender, expresar y canalizar nuevas formas de lucha yo la llevaría a los momentos de la Unidad Popular, donde fueron múltiples y muy variados los problemas que se presentaron ante las formas de lucha surgidas “desde la base” por la situación de emergencia que se vivía.

Es cierto que el gobierno popular intentó propiciar formas de control de la clase trabajadora sobre ciertas instancias, democratizando el proceso de decisiones y dando fluidez a los canales de participación.

Sin embargo, la experiencia más importante en términos de la participación popular se da en el nivel de la base que empieza a desarrollar formas de organización y movilización para enfrentar la escalada derechista.

Así se conforman las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios); los cordones industriales (formas de agrupación obrera, en general del área de propiedad social, sobre base territorial); los comandos comunales (que serían la etapa siguiente a los cordones), como formas organizativas espontáneas que el pueblo creó para enfrentar a la burguesía sobre todo durante el conocido Paro Patronal de Octubre.

Estas formas de organización, expresión y defensa popular plantearon serios problemas al gobierno popular, pues no se sabía cómo manejarlas, cómo entender su surgimiento, su relación con los sindicatos, con los partidos, con el gobierno.

Más aún, se tendieron a ver como maniobras divisionistas, como intentos de generar un “poder dual” en una situación donde no había, pues el gobierno era de los trabajadores; la CUT los veía como una estructura sindical paralela que usurpaba sus funciones.

Creemos que esas formas espontáneas de organización y autodefensa, a pesar de que los sectores que participaban en ellas tenían una afiliación precisa y aunque no actuaban como delegados de sus partidos, estaban lejos de constituirse en un poder alternativo; tampoco desafiaban a los partidos y sindicatos pues tenían otros objetivos y otro campo de acción, ya que no se articulaban a nivel nacional, sino local, ni planteaban un proyecto de poder nacional.

Sin embargo, eran formas necesarias y creativas y combativas de auto-defensa en condiciones de emergencia, que creemos debieron ser encauzadas, aprovechadas, impulsadas y no desalentadas.

Ante la falta de conducción política, este movimiento se fue debilitando

progresivamente. Esta experiencia nos señala, por un lado, el papel de este tipo de movimientos y sus posibles alcances, pues en el caso mencionado, a pesar de su fuerza y empuje no podían imponerse como formas de organización alternativa y para haberse desarrollado habría hecho falta una articulación política más orgánica; por otro lado, el papel y la enorme responsabilidad que tienen los partidos políticos, pues éstos pueden impulsar, ser ejes, canales de este tipo de movimientos, pero también pueden ser frenos en su desarrollo a otro nivel.

Por todo lo dicho, me parece una alternativa falsa plantear este problema en términos de nuevo sujeto "histórico" *versus* partido político, porque esto es no entender sus respectivos campos de acción y el papel que cumplen bajo determinadas condiciones, ni sus posibles formas de interrelación, que no de exclusión.

Por ejemplo, Nicos Poulantzas, al definir las formas que asume el Estado y la dominación burguesa en la fase actual de acumulación monopólica, señalaba cómo, bajo formas de creciente autoritarismo, de relajamiento de los vínculos de representatividad, de restricción de la capacidad de representación de distintos intereses por los partidos políticos; en momentos en los cuales se da una exclusión acentuada de las masas de los centros de decisión política, el "estatismo autoritario provoca una verdadera explosión de exigencias democráticas".⁴¹

Así, él destaca cómo bajo las características antes señaladas se observa la emergencia de formas de lucha que tienden al ejercicio de una democracia directa de base, de focos autogestionarios y redes de intervención directa de estas masas, de irrupción en suma de nuevos actores políticos como los comités de ciudadanos, las organizaciones de barrio y otras formas de autodefensa.

Ante esta situación, el problema que se plantea Poulantzas es cómo articular la ampliación y profundización de las instituciones de la democracia representativa y las libertades políticas y ciudadanas, que han sido también conquistas populares, con el despliegue de estas formas de democracia directa y de este enjambre autogestionario.

Creo que el planteamiento, *mutatis mutandi*, es válido para la situación que he venido analizando: Frente a la emergencia de nuevos sujetos políticos, por un lado, y por otro, frente a la necesidad de recuperar formas de ejercicio y participación democrática, de rearticulación de partidos políticos y sindicatos, el problema es articular los dos procesos, evitando, como dice Poulantzas, la reducción de uno en otro o el simple paralelismo y yuxtaposición de ambos.⁴²

Como lo dice Clodomiro Almeyda, la gran tarea de hoy consiste en forjar un instrumento político, de una vanguardia que rompa el esquema tripartito del arco político nacional, que sea capaz de constituirse en fuerza

⁴¹ Nicos Poulantzas, *Estado, poder y socialismo*, México, Siglo XXI, 1980, p. 303.

⁴² *Ibid.*

política dirigente que oriente, organice y conduzca al movimiento social ya desencadenado.

Pero también, como dice Garretón, no hay viabilidad para proyectar simplemente el modelo político de acción anterior, sino que este proceso debe insertarse en una situación nueva que plantea nuevas contradicciones y nuevos campos de lucha y enfrentamientos, donde converge lo que aún es vigente con lo que está emergiendo.